
José Errejón

Otra política económica

La recesión azota de manera despiadada a la economía española en razón de su condición de economía hiperterciarizada y operando además sobre una economía muy dañada por la crisis del 2008 y los efectos de las políticas de consolidación fiscal aplicadas por el PP. Las primeras previsiones de la Comisión Europea -un 9,4% de caída del PIB en 2020, un 18,9% de desempleo y un 115,6% de deuda pública-, aterradoras en el momento en que fueron formuladas, aparecen ahora como casi optimistas a la vista de la evolución seguida desde entonces.

Los hechos son bien conocidos: la segunda oleada de la pandemia ha llegado mucho antes y con más intensidad de la esperada y la infraestructura sanitaria no parece haber tenido tiempo de fortalecerse en estos meses. La OMS avisa de que el otoño podría ser especialmente duro en cifras de contagios y de mortalidad, lo que podría dar al traste con las esperanzas del Gobierno para incrementar el PIB en este tercer trimestre y compensar así la tremenda caída de los dos primeros. Y todo ello, naturalmente, sin contar con que la evolución de la pandemia pudiera obligar a decretar alguna modalidad de nuevo confinamiento.

De modo que es mucho pedir a la sociedad que muestre confianza en los efectos salvíficos de la aprobación de los PGE para 2021, primero, y en la venida de los recursos financieros del Plan para la Reconstrucción de la UE, cuando comiencen a llegar.

A seis meses del comienzo oficial de la pandemia creo que, como poco, se puede decir que las decisiones del Gobierno no han sido especialmente afortunadas. Es verdad que se enfrentaba a una situación absolutamente sin precedentes para las clases políticas contemporáneas y que, sin llegar a los niveles de la española, la situación de economías próximas como la italiana tampoco es demasiado esperanzadora.

Pero diría que hay en la explicación de esta falta de fortuna un factor de mucho mayor peso que el acierto relativo al manejar las herramientas económicas en manos del Gobierno. La impresión es que ha habido no una subestimación sino un subdimensionamiento del problema al que nos estábamos enfrentando (o acaso que las categorías con las que se le enfrentaba resultan notablemente inadecuadas).

Para decirlo en breve, la impresión es que los analistas del Gobierno no han sabido ver la dimensión sistémica del reto al que se enfrentaban y que, a partir de ahí, todas sus recomendaciones iban a minimizar el daño en la dimensión sanitaria y a recuperar cuanto antes la normalidad en el ámbito económico. Que no han advertido que no se trataba de una situación recesiva normal que pudiera ser combatida con los instrumentos al uso, inyectando recursos para recuperar la actividad económica y estimular la demanda. Que el parón en la actividad comercial y turística podría desarticular las estructuras productivas de estos sectores y afectar gravemente a sus sectores proveedores. Que, acaso, se habían tocado elementos basales de la peculiar estructura económica española que no podrían recomponerse para una vuelta a la normalidad imposible por la situación global de contracción de la demanda. Y que, como consecuencia de todo lo anterior, era procedente examinar con más atención la naturaleza de la crisis y revisar las bases sobre las que descansa el llamado modelo económico español desde 1986, si no desde 1959 [En 1986 el Reino de España entró en las entonces Comunidades europeas. En 1959 y como forma de aproximarse a las estructuras del recién creado Mercado común Europeo, el régimen franquista aprobó el Plan de Estabilización. La cita de estos dos hitos históricos se justifica porque creo que son cardinales en la construcción del llamado modelo económico español, en mi opinión todavía vigente]. Se podrá contestar que, en una situación de emergencia como la de marzo, no había demasiado tiempo para reflexiones profundas y que había que actuar para transmitir tranquilidad y confianza a la sociedad y a los mercados. Pero hay que responder, de entrada, que el único actuante en esos momentos era el Estado, que los "mercados" lo único que hacían era gimotear y suplicar ayudas del Estado. Y que cuando el Estado es requerido para ayudar a la economía capitalista -hecho cada vez más

frecuente por las reiteradas crisis de la misma-, es perfectamente legítimo que el gobierno del Estado, en tanto que representante de la sociedad, se plantee las modalidades posibles de su intervención.

Para decirlo aún con más claridad, el Gobierno, una vez decidido a usar los instrumentos constitucionales más excepcionales, como el Estado de alarma, tenía en su mano considerar la posibilidad de intervenir sectores estratégicos en tanto proveedores de bienes esenciales a través de instrumentos y mecanismos constitucionales como los previstos en el artículo 131 de la Constitución, que le habilitan a planificar mediante ley la actividad económica para, entre otras finalidades, "atender las necesidades colectivas". A título de mero ejemplo, ¿es que la necesidad colectiva de salud frente a la pandemia no justificaba una ley para planificar la producción, abastecimiento y distribución de fármacos, vacunas y equipamientos médicos en general?

El lector *realista* aducirá que la aritmética parlamentaria y la dura oposición de la derecha no permitiría explorar esta posibilidad. No estoy seguro que la mayoría que llevó a Sánchez a la Moncloa no permitiera aprobar una ley ordinaria como la prevista en el artículo 131.1, pero, más allá de esta circunstancia, ¿no sería oportuno que, en una situación excepcional como esta, el "gobierno más progresista de la historia" probara su condición afirmando la primacía del interés general, incluso ante la posibilidad de que los representantes de los sectores pudientes del país boicotaran tal iniciativa? En estos momentos excepcionales, cuando las mayorías sociales pueden percibir con más claridad los intereses que se esconden detrás de los programas políticos, ¿por qué renunciar a esta ocasión de hacer pedagogía social?

Pero, desgraciadamente, nada de esto ha sido siquiera intentado. Hasta la fecha y pendientes del debate sobre el proyecto de ley de PGE para 2021, las medidas económicas del Gobierno pueden resumirse en

dos: mantener siquiera nominalmente los empleos en las empresas y sectores más afectados por la crisis a través de los ERTes y aportar liquidez a las empresas mediante un programa de avales bancarios orientado a garantizar a las entidades de crédito el cumplimiento de las obligaciones crediticias. Esos dos ejes están suponiendo una pesada carga para las finanzas públicas que, sin haberse recuperado de la enorme factura del rescate bancario del año 2012 en términos de deuda pública, ha debido incrementar sus niveles de endeudamiento, en un contexto de caída de los ingresos tributarios, para poder sostener estas obligaciones.

Como se recordará, los altos niveles de endeudamiento han sido esgrimidos permanentemente en estas últimas cuatro décadas contra las políticas keynesianas, causante según sus postulantes neoliberales de la inhibición de la inversión privada (la única que, según ellos, era creadora de empleo). Ahora, sin embargo, ese problema no parece existir. Ya habrá tiempo, cuando se hayan recuperado las ganancias y la acumulación de capital, para echarle en cara la ineficiencia y el endeudamiento a lo público y reclamar políticas de saneamiento; hasta entonces, "unidad nacional", "todos remando en la misma dirección" y los intereses del abultado endeudamiento a cargo de los impuestos pagados por quienes todavía tengan un empleo.

Este incremento en los niveles de endeudamiento público será una nueva oportunidad para la consolidación del control del capital financiero sobre los poderes públicos. Con esos niveles de endeudamiento público, serán los mercados los que determinarán qué políticas pueden ser ejecutadas y se hace difícil pensar que tengan demasiadas oportunidades las que beneficien a las mayorías sociales.

Es verdad que una parte de los poderes financieros querrían aprovechar la crisis para privatizar lo que queda de Estado. Pero necesitan de su contribución para cuidar del "interés general", esto es, necesi-

tan de una maquinaria recaudadora para financiar aquellos servicios públicos que no son rentables para la ganancia privada, para disponer de mano de obra sana, cualificada y dispuesta a trabajar por el salario que se le ofrezca; de jueces y policía que paguemos todos para cuidar del cumplimiento de los contratos de préstamos para la vivienda y para que la exigencia de derechos sociales y laborales no traspase el umbral de rentabilidad, de enseñantes que capaciten a nuestros hijos para la sumisión y para servir a la máquina de extracción de valor, etc. Así que colaborarán con los gobiernos para gestionar los recursos financieros procedentes de la UE para la reconstrucción.

Eso no quiere decir que los centros de poder financiero vayan a perder la dirección de los asuntos globales del sistema. De hecho, el estilo de reconstrucción está pensado claramente para favorecer la intervención dirigente de los bancos; la tan deseada mancomunidad de la deuda pone en primer plano su papel y para prepararse ya estamos viendo los primeros pasos en la fusión/absorción Caixa/Bankia.

El mito de la reconstrucción

La creación del *Next Generation UE* ha despertado todo género de parabienes entre la mayor parte de los analistas, de izquierda a derecha. Se destaca tanto el hecho mismo de la "rápida respuesta de la UE" como la naturaleza y forma de financiación de la misma (por vez primera, apelando al endeudamiento de la propia UE), en ambos casos contraponiéndola con la de la anterior crisis financiera. Y se la señala como un hito decisivo en el largo proceso de construcción europea.

¿Estamos en presencia de una política keynesiana similar a las practicadas después de la 2ª GM, como proclaman entusiasmados algunos economistas de izquierda? Y si así fuera, ¿cuál sería el perfil dominante del modelo económico al que se apunta como objetivo y resultado de esta "política de reconstrucción"? No es este el sitio ni el

que esto escribe es capaz para contestar como merece esta pregunta. Pero sí puede apuntarse algún comentario con intención de incitar el imprescindible debate al respecto. Para no alargar este comentario, lo esquematizo así:

- Sobre las ayudas y su cuantía: contra lo que al principio se prometió, el total de los fondos del NG UE se distribuye casi al 50% entre ayudas directas a los presupuestos de los Estados miembros y un régimen de préstamos que representan un esfuerzo adicional de endeudamiento para estos Estados, algunos de los cuales como España desborden el 125% de deuda pública en términos de PIB. Para España el total de ayudas se distribuye en 72.000 millones de ayudas directas y 68.000 millones en forma de préstamos. El efecto del segundo tramo, en términos de deuda pública, no precisa comentarios.

- Las ayudas UE no van a solucionar los problemas de insolvencia que tienen gran parte de las empresas, en la actualidad el problema más grave de la economía española. Hasta ahora, el Gobierno ha orientado su acción en sostener el consumo de los trabajadores a través de los ERTes y proveer de liquidez a las empresas a través de los préstamos bancarios avalados por el Estado (siete de cada 10 empresas tuvieron problemas de liquidez en el primer semestre).

- Es dudoso que el esfuerzo inversor en transición energética y en digitalización pueda tener los efectos estimulantes que tuvo el fordismo en 1945. Y es más que dudoso que la mera gestión de la demanda, como reclaman los economistas keynesianos, pueda solucionar la crisis de rentabilidad que hizo desplazarse las inversiones desde los sectores productivos a las finanzas.

El Gobierno pretende centrar todas sus esperanzas de recuperación económica en la llegada de los fondos UE y con esa promesa pretende aglutinar un muy amplio acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Es

harto improbable que el volumen de recursos detraídos de esa fuente en dicho ejercicio cubran ni siquiera los gastos ya realizados en el presente ejercicio sólo para sacar adelante las medidas de avales bancarios y ERTes. Pero no es eso lo más importante, lo que importa discutir aquí es la relevancia de las políticas emprendidas para hacer frente a esta nueva crisis que promete dejar chica a la del 2008.

Límites de las políticas económicas convencionales

Más arriba se ha señalado las limitaciones analíticas que pudieran estar en el origen de lo insatisfactorio de las respuestas políticas a la grave recesión desatada por las medidas contra la pandemia.

Se puede aseverar que, en el corto plazo, la inyección masiva de liquidez en la economía, con ingresos para asalariados y autónomos, junto a créditos baratos para los pequeños empresarios, es la única receta posible. Ya no se puede creer en el funcionamiento automático e infalible de los mercados. La perplejidad de la empresa privada ante la situación de crisis ha colocado al Estado como el agente fundamental para restituir el sistema económico.

La mayoría de la izquierda gobernante parece creer en una u otra versión del "árbol mágico del dinero", ve la situación de los tipos de interés por debajo de cero no como un indicador de la crisis del capital sino como una ocasión para endeudarse y así poder financiar el aumento de la inversión estatal, el gasto social o un New Deal verde. No parece advertir el carácter de parche que tienen estas políticas. Con los billones que se gastaron después de 2007-2008 el capital sólo compró un poco más de una década de vida, pero ahora existe sólo como "sistema zombie". La pregunta es cuánto más aguantará así y qué costes para el conjunto de la humanidad representará la prolongación de su existencia.

Para el mediano plazo la lección del coronavirus es ineludible. Derechos sociales universales en salud, educación, vivienda,

dependencia y pensiones, garantizados por el Estado. Y, en el ámbito productivo, transformar la matriz productiva desde las actividades primarias hacia la industria y otros bienes y servicios que incorporen inteligencia y tecnología en los procesos de transformación. En una economía de guerra todos siguen trabajando; de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, en efecto, hubo pleno empleo a medida que la máquina de guerra fue alimentada. Actualmente nos dirigimos hacia el mayor aumento del desempleo en algunos trimestres de la historia económica. Esta no es una economía de guerra.

En las cuatro últimas décadas, las oligarquías se han apoderado del altísimo nivel de socialización de las fuerzas productivas (fuerza de trabajo, recursos naturales, tecnología) y lo ha puesto a su servicio. Esta socialización ha desembocado no en el esperado socialismo sino en el *socialismo para ricos*. Pero este socialismo para ricos no ha hecho sino agravar las facturas que obliga a pagar al conjunto de las sociedades por su permanencia.

El año 2020 inaugura una nueva Gran Depresión económica más amplia y más profunda a nivel mundial que las conocidas hasta ahora. Si no existen condiciones para volver a estimular la inversión "productiva" para el capital (al no invertir sin expectativa de ganancia), no habrá salida de la crisis sin cambio de sistema económico. En otras palabras estamos ante una crisis sistémica. La inversión en el ámbito especulativo, redistributivo e improductivo (como la re-compra de las acciones propias con crédito prácticamente gratuito) fomenta la concentración de capital en cada vez menos corporaciones. Todas estas inversiones improductivas no generan nueva riqueza, ni amplían el mercado total, ni fomentan el crecimiento, sino que fomentan sólo la progresiva concentración de capital e ingreso en cada vez menos manos. Los Estados se afanan en la salvación del capitalismo moribundo, los gobernantes son incapaces de pensar la vida social sin el

capitalismo. Pero forzados por la pandemia al parón productivo, no encuentran otra solución para mantener vivo al paciente que aplicarle la respiración artificial como a los contagiados por el virus: una gigantesca inyección de recursos financieros, una creación artificial (¿alguna no lo es?) de dinero, un endeudamiento masivo para las generaciones venideras. Las cifras de destrucción de empleo nos plantean esta cuestión: ¿será posible la recuperación, siquiera sea parcial, del empleo perdido y en cuánto tiempo? La crisis capitalista, que nunca se ha ido y que constituye, en realidad, la normalidad de la economía capitalista, vuelve a mostrarse en toda su crudeza. Ante la misma, el discurso y el pensamiento único neoliberal, vivido como un dogma desde hace cuatro décadas, guarda silencio confiando en que la desmemoria social permita olvidar los crímenes cometidos en su nombre por la mayoría de los gobiernos (en España también). ¡Ahora no tienen ningún escrúpulo en pedir de nuevo la intervención del Estado!

El capitalismo es receptivo cada vez a menos remedios. La medicina socialdemócrata, que lo salvó durante tantas décadas, ya no funciona más con él. Al contrario, las salidas que se preparan traerán una nueva y dura vuelta de tuerca a los mercados laborales en detrimento de la población trabajadora, así como redobladados ajustes sociales. Esto es, la senda trazada por las élites busca una recomposición de la relación de las clases dominantes con sus sociedades, abundando en el perjuicio de estas últimas.

De igual manera, se reestructurará el poder entre la propia clase capitalista global. Como toda crisis, ésta será también una oportunidad para unas u otras fracciones y tipos de capital. Provocará un reacomodo del mercado, para afianzar y expandir las tecnologías de cuarta y quinta generación (el cuento para las poblaciones será a buen seguro el de acabar con la producción contaminante, para empezar a hacer un "capitalismo sostenible", oxímoron donde los

haya que no tiene más misión que la de acomodar conciencias a lo que viene).

Es posible que la década que comienza nos depare el fin de la ilusión de la crisis como un accidente del capitalismo, que una vez superado dejaría expedita la marcha hacia el progreso y el bienestar. La percepción social de la emergencia climática y de lo que se ha dado en llamar la "sexta extinción" será también inevitable. La geoeconomía y la geopolítica de un sistema en decadencia, con recursos cada vez más escasos, tenderán a militarizarse y amenazar al conjunto de la humanidad; las amenazas de guerra se extienden desde el mar de la China al Mediterráneo y no parece que ninguno de los Estados importantes esté dispuesto a afrontar de una manera seria el imprescindible proceso de desarme que liberaría ingentes cantidades de recursos públicos para las urgentes atenciones sanitarias.

Y también del orden interno: el empleo, la desigualdad, la seguridad colectiva ("seguridad social"), la convivencia y las relaciones sociales (¿más individualismo?), sufrirán profundas convulsiones. Aumenta ya la explotación, la precarización y la inseguridad laboral, ayudadas por el teletrabajo (que tanto promocionan y que tanto aísla a la fuerza de trabajo entre sí).

El tiempo de vida insertado en un continuum sin fin como tiempo de trabajo-empleo o como tiempo para prepararse para el trabajo-empleo. La intención de eliminar el dinero físico tiene por objeto aumentar todavía más el control de lo que hacemos y consumimos. La ingeniería mediática del miedo puede ayudar a aceptar la vigilancia social (por ejemplo mediante GPS), más allá de esta emergencia sanitaria.

Otra política económica

Nadie discute el protagonismo de los Estados en el intento de revertir esta recesión. El sector privado ni estaba ni está en condiciones de liderar una recuperación económica que pueda conducir al pleno empleo y al aumento de los ingresos reales.

Sus intelectuales orgánicos, esos que en épocas normales desprecian con arrogancia la presencia de lo público como equivalente a ineficiencia, ahora callan y si acaso resaltan el papel de las empresas como las únicas que pueden crear riqueza y empleo, no sea que les vaya a dar a los gobiernos por pensar en que muchos de los bienes y servicios que hoy produce el sector privado podrían ser producidos y hasta autoproducidos sin tener que mantener a una casta (¡esta sí!) parasitaria.

Así que no quedará otro remedio que los recursos públicos, es decir, los de las poblaciones, los que, una vez más, intenten sacar a la economía capitalista del atolladero. Inversión pública ingente para levantar sectores productivos, como el de las renovables, que de otra manera nunca tendrían su oportunidad mientras no garantizaran a los inversores su rentabilidad. Avales bancarios para respaldar los créditos tomados por empresas al borde de la quiebra si no ya en quiebra técnica; ERTes prolongados sine die también para mantener empresas sobre todo en el sector del turismo y para sostener la demanda por la vía del consumo de sus trabajadores; incremento del gasto fiscal, es decir, de los ingresos tributarios que se dejan de percibir por la exención de los sujetos pasivos obligados, con el consiguiente desplazamiento a la financiación externa (deuda).

Son esas alguna de las actuaciones que se reclaman del Estado en esta hora. Ni por asomo se entra a considerar la posibilidad de ahorrar una buena parte de estos recursos sustituyendo la inyección en empresas inviábiles por su intervención en determinados sectores estratégicos (p.e., el farmacéutico, a fin de asegurarse la provisión de fármacos y todo tipo de material sanitario en un momento tan crucial de lucha contra la pandemia). Ni tampoco acometer algo tan justificable en estas circunstancias como la dirección estatal de los sectores productivos de la economía. Todas estas actuaciones se han hecho con toda normalidad con ocasión de las guerras pero, claro,

entonces, se estaba preparando una reestructuración del negocio y todos los recursos eran pocos para hacer frente a la magnitud del cambio requerido.

Por supuesto que todo el esfuerzo público demandado va a suponer un nivel de endeudamiento que pesará sobre varias generaciones venideras reduciendo sus posibilidades de adoptar las políticas que consideraran convenientes.

Si las obligaciones de la deuda pueden aumentar indefinidamente y los Bancos Centrales crear dinero sin límite, si tales obligaciones pueden suspenderse o cancelarse por mandato legislativo, si el capitalismo sólo funciona porque los gobiernos siguen rescatando a bancos y corporaciones a expensas de todos los demás, entonces, es posible que sea llegado el momento de que nos preguntemos si no merecería la pena aplicar esos esfuerzos de acuerdo con los objetivos libremente decididos por la sociedad en su conjunto a través de procedimientos democráticos. Es esta una decisión pura y exclusivamente política que corresponde adoptar al pueblo soberano. Ninguna urgencia superior a la que se derivaría de poner toda la información disponible para la adopción de la misma.

Lo que se necesita para revivir la producción, la inversión y el empleo, no es rescatar a las grandes empresas con subvenciones y préstamos para que puedan volver al *business as usual* (negocios como de costumbre), sino un enérgico programa de inversiones públicas complementado con la toma del control en algunos sectores estratégicos y la dirección estatal de los sectores productivos de la economía. En lugar de aplaudir el rescate de las grandes corporaciones, deberíamos expropiarlas. En lugar de aprobar una moratoria temporal a los desalojos y los atrasos en los alquileres, deberíamos confiscar los bienes inmuebles de los fondos buitres para proteger a los trabajadores y orientar su actividad hacia la rehabilitación energética de edificios. Estas y muchas otras medidas son básicas para garantizar nuestro derecho

a la vida por encima del "derecho" del capital.

Si se para la actividad económica en los sectores no relacionados con la batalla sanitaria contra el virus, si se desalariza una parte importante de la población ocupada, si las necesidades básicas son cubiertas por servicios públicos al margen del mercado, si la actividad económica se planifica exclusiva y/o fundamentalmente para la satisfacción de las necesidades sociales esenciales, entonces estaríamos saliendo de la lógica capitalista.

La crisis del Covid-19 ha impuesto ya la prioridad de aquellos productos y servicios que satisfacen necesidades vitales. Se tendrán que dejar de lado las "necesidades" creadas por el capital con el fin casi exclusivo de realizar ganancias y en buena medida superfluas para la vida de las personas.. En la producción, deberá acabarse con la obsolescencia programada y aumentar necesariamente la vida útil y duradera tanto de los medios de producción como de los bienes de consumo. En esta crisis existe la posibilidad y necesidad de orientar la producción por las necesidades y posibilidades concretas de la vida de las personas. Mundialmente se abre una coyuntura para la reivindicación y lucha por una economía que reafirme la vida en su dimensión más integral.

Es este y no otro el reto que las sociedades contemporáneas, la sociedad mundial, tiene por delante. Hay que parar el funcionamiento del capital para que la humanidad tenga alguna oportunidad para sobrevivir. No "expropiar los medios de producción y distribución", que dejaría intacta la lógica del capital, el trabajo abstracto y la producción de valor.